



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

**CAUSA N°3734/2016**

*Sentencia Definitiva*

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **GENOVESI, CARLOS OSVALDO c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

**EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO**

GENOVESI CARLOS OSVANDO apela la Resolución D.R.F. N° 64946 que desestima el recurso de impugnación administrativa contra la Resolución N°28887 que impone una sanción de multa de \$ 51.594,20, por infracción al artículo agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11.683 (t.o. Decreto 821/98 y sus modificaciones), incumplimiento del alta en el registro de Altas y Bajas en materia de seguridad social, respecto de los Sres. José Genaro Cesari, Carlos Rene Villegas y Lucas David Caceres

Se han planteado cuestiones que es oportuno analizar “a priori”

- a) Planteo de la demandada en relación con la apelabilidad en razón del monto cuestionado.

En la contestación al traslado del recurso, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alega que la cuestión es inapelable, en razón del monto involucrado en la causa, pues no supera la suma prevista por el art. 242 del CPCCN, ya que es inferior a \$ 90.000

Se trata en el caso de una multa, y como tal reviste carácter punitivo. Por lo que dicha norma no puede ser invocada para impedir que la Cámara discuta la sanción impuesta administrativamente, pues ello violaría el principio de separación de poderes y el derecho de defensa en juicio del contribuyente sancionado. Máxime si la intervención judicial de este Tribunal, es originaria y no existe posibilidad de una intervención de grado que garantice, por lo menos, la consideración judicial del derecho que se dice lesionado.

La inapelabilidad por razón del monto en casos como el de maras no responde a una recta interpretación de la doctrina resultante de inveterada jurisprudencia del Máximo Tribunal de justicia del país como el “Fernández Arias c/ Poggio”

Por lo tanto se rechaza la oposición efectuada.

- b) Beneficio de litigar sin gastos.

Peticiona el apelante la eximición de los gastos causídicos, habiendo sido encarada tal pretensión como un beneficio de litigar sin gastos, cuyo trámite se encuentra previsto en el Capítulo 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, arts. 78 y ss.

El beneficio de litigar sin gastos es la franquicia que se concede a ciertos litigantes, de actuar sin la obligación de hacer frente a las erogaciones que demanda un juicio -costas, tasa de justicia, etc.- sea provisoria o definitiva. Es una institución prevista en favor de quienes no



cuentan con medios económicos para afrontar el pago de los gastos que necesariamente implica la sustanciación de la causa y tienen en mira, por un lado, la igualdad de las partes y por la otra, el aseguramiento de la garantía constitucional a la defensa en juicio.

“El instituto del beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), pues por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes, marco en el cual deben ser valorados también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio. Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos) \*B. 793. XL. IN1 23/06/2015

En otorgamiento del beneficio, supone de parte de quien lo peticiona la demostración de los extremos que acrediten la situación económica e imposibilite afrontar las erogaciones judiciales. El importe cuestionado en autos, como se ha dicho precedentemente, ascendía a \$51.694,20, al año 2014, derivando de dicho monto los gastos causídicos que se originen

El objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para hacer frente a las erogaciones que irroga el juicio.

A tales efectos el Tribunal ordenó una medida para mejor proveer, requiriendo al apelante diversa documentación e información (fs. 102) La cual fue contestada adjuntando constancias de los bienes y estado de cuentas bancarias a la fecha de presentación.

Corrido traslado de ello al fisco y demandada, el primero no se expide al respecto, y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, se opone a la formación de tal beneficio proponiendo diversa prueba.

Si bien es cierto que en el procedimiento de concesión de beneficio de litigar sin gastos la contraparte puede oponerse a su concesión, ello es en la medida que refute y destruya la prueba producida por su contraria o aporte elementos de juicio suficientes que demuestren la inexistencia de la insuficiencia de medios que esta invoca.

La prueba que propone el demandado, en general, no es ajena a la aportada por la actora al contestar la medida para mejor proveer. Se describen propiedades y cuentas bancarias, información a la fecha de requerimiento. De allí que se estima inoficiosa la producción de la misma.

En ese orden, es de destacar que la decisión sobre la procedencia o no del beneficio de litiga sin gastos es de apreciación judicial.

Así lo ha entendido el Alto Tribunal “La concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de las condiciones de pobreza alegada. (CSJN. Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos) \* B. 793. XL. IN1 23/06/2015)

En los elementos probatorios agregados, en cumplimiento de la medida ordenada por la Sala, se presenta informe sobre las propiedades con que cuenta el apelante, dos inmuebles de los que es titular del 50 % uno de ellos la casa habitación, a más de una oficina y un departamento, las cuentas bancarias dan saldo negativo. Certificado por contador público. Ello lleva al actor a señalar que solo la realización de bienes posibilitaría el cumplimiento del depósito previo e impuestos.

Para la procedencia del beneficio de litigar sin gastos no es necesario que quien lo solicita se encuentre en estado de indigencia bastando que se demuestre la imposibilidad de afrontar los gastos de justicia sin comprometer los medios de su propia subsistencia y su familia

“A los fines de obtener el beneficio de litigar sin gastos no es imprescindible producir una prueba tal que otorgue un grado absoluto de certeza sobre la imposibilidad de pago invocada, sino que basta con que se alleguen al expediente suficientes elementos de convicción que permitan verificar, razonablemente, que el caso encuadra en el supuesto que autoriza su otorgamiento. (CSJN Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios ( beneficio de litigar sin gastos) \*B. 793. XL. IN123/06/2015). No siendo imprescindible producir una prueba acabada que otorgue certeza sobre las condiciones de pobreza alegadas (C.S.J.N., 9 de agosto de 1988, in re "Siderman").

Ahora bien, en el caso de autos, la situación patrimonial del recurrente, no es asimilable a la de quien nada tiene, o bien, la de quien tiene solo lo indispensable para su subsistencia. Por lo tanto, no parece justo que se lo exima de soportar los gastos judiciales que están a su cargo.

En consecuencia, propicio desestimar el beneficio de litigar sin gastos

c) Depósito previo de la suma cuestionada

Sentado lo dicho, cabe analizar si se encuentra habilitada la vía, conforme lo previsto por el artículo 15 de la ley 18.820, en cuanto a la exigencia del depósito previo del monto en discusión

El Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, sin que ello importe una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto



excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación, o cuando la deuda fuera inexistente (Fallos 288:287, consid. 10 y sgtes.).

Si bien el beneficio de litigar sin gastos se propicia que sea desestimado, entiendo que las circunstancias alegadas, evidencian un situación económico financiera que avala la exención de este recaudo legal, por lo que se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

d) Situación de fondo

Plantea la recurrente la nulidad por falta de motivación o motivación insuficiente, la nulidad del acta de comprobación

“Conforme lo prescripto por el art. 172 del C.P.C.C., para solicitar la nulidad de un acto, notificación o resolución administrativa, no es suficiente la mera invocación de que el litigante ha sido privado del derecho de defensa en juicio sin indicar concretamente de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquel derecho (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 27.10.04, “Empresa de Transportes Martín Güemes S.A.”).

En consecuencia, no resultan pasibles de tratamiento las falencias y nulidades a que hace referencia el recurrente, en tanto no se observa de qué manera se habría violentado el derecho de defensa a lo largo del procedimiento; toda vez que la parte tuvo oportunidad de tomar vista de todo lo actuado e impugnar a través de sus distintas presentaciones.(exp. 54002/08. "MERCOPALLET S.R.L. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda". 19/08/09 Boletín de Jurisprudencia nº 51. sent. def. 129944.Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala I.)

Considero que la nulidad planteada no puede prosperar pues el actor tuvo ocasión de conocer los actuados y presentar su impugnación así como la prueba que estimara pertinente a su derecho.

En consecuencia, no se observan vicios que afecten su derecho de defensa

En cuanto a la situación de los sujetos relevados a su respecto el recurrente niega el vínculo dependiente que presume el organismo y que conlleva a la sanción cuestionada en autos.

La actuación se origina con la inspección y relevamiento de personal realizado el 9 de septiembre de 2013 en la obra en construcción ubicada en el Barrio Pino Azul ubicada en el Lote N°2 al sur de la calle Los Castaños Gral. Roca, conforme Acta de Comprobación, donde se toma declaración a diversos sujetos, Sres- Lucas David Casares, Carlos Rene Villegas y José Genaro Cesari, los que declaran como actividad desarrollada la de oficial albañil consignando fecha de ingreso, días y horarios de trabajo y, remuneración percibida. Estos sujetos según el acta se consideran dependientes del apelante.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En su descargo, el Sr. Carlos Alberto Genovesi, señala que en el ejercicio de su profesión de arquitecto, jamás llevo a cabo obra alguna, limitándose solo a la elaboración y dirección de las mismas. Afirma que los nombrados fueron contratados por el propietario de la obra a quien debe encauzarse la investigación.

. El organismo considera que las defensas esgrimidas son insuficientes, dando prioridad a lo declarado ante la inspección, en cuanto los relevados manifiestan que se encontraban prestando servicios para Genovesi Carlos Osvaldo.

. En su apelación, el actor ratifica lo dicho. Señala que las personas relevadas estaban a cargo del propietario de la obra y no del dicente. Adjunta informe de la Municipalidad de General Roca lugar del relevamiento, que indica que nunca se inscribió como empresa constructora, ni como ejecutor de obra, rechaza la competencia del organismo para definir si la relación laboral era con el sino con el propietario. Se agravia de que se le obligue a demostrar un hecho negativo, Alega que ni siquiera se cito al propietario de la obra que fue quien supuestamente contrato a las personas relevadas Plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 1566.

El profesional que tiene a su cargo exclusivamente el proyecto de una obra y es director ejecutivo de la misma, no es considerado como un empresario de la industria de la construcción, con personal dependiente a su cargo, sino como un profesional que se desempeña en ese ámbito. Sin embargo, ello ha de ponderarse en cada caso, ya que la actividad que despliega y por la que se contrata puede llevar a incluir la realización de la obra y con ello la existencia de personal propio del área de la construcción que este mismo suministre. Personal que está bajo su dependencia y no del dueño de la obra, quien contrata un producto concluido como es la obra en sí.

En el caso de autos, el recurrente se limita, tanto en la instancia administrativa como en la judicial, a señalar que el personal relevado es supuestamente contratado por el propietario de la obra. No aporta elemento alguno respecto del convenio llevado a cabo con este último, específicamente en cuanto a delimitación de la actividad que desempeña y, en su caso, de la responsabilidad en lo que hace a los trabajadores que se desempeñan en la obra.

No es suficiente para develar la real situación de la actividad del apelante en la obra inspeccionada, -sea como proyectista, como director de obra o encargado de la construcción. alegar como está codificada su actividad en el nomenclador del que hace mérito. En todo caso esta referencia únicamente evidencia como se encuentra inscripto exclusivamente. Antes bien en el Acta de Comprobación los sujetos relevados refieren como empleador a Genovesi Carlos Osvaldo, como señala el organismo

“Las actas de inspección y de determinación de deudas labradas por funcionarios de la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Administración Federal de Ingresos Públicos), constituyen instrumentos públicos (CCC, art. 289 inc "b"), por lo que hacen "plena fe" sobre el contenido de las declaraciones sobre reconocimientos, enunciaciones de hechos, etc. "directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado", salvo prueba en contrario (v. art. 296 inc. "b"). Expte. 12402/2013. "LATIN EXPRESS FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.A.

Fecha de firma: 02/08/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#28009206#302667912#20220523112147658

c/Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ Impugnación de deuda".  
16/03/18Sentencia definitiva. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala II.)

En autos, como se ha dicho, no existe prueba a contrario de la presunción del organismo, aun cuando tuvo ocasión de presentar las que hacían a su derecho.

Por consiguiente, propicio, rechazar el recurso en este acápite.

Se desestima el planteo de inconstitucionalidad que deduce respecto de la Resolución 1566, por no reunir la queja fundamentos suficiente para ello

En efecto, una declaración de tal gravedad amerita necesariamente la demostración, de quien la pretende, de los agravios que le origina en concreto esa disposición, resultandos insuficientes los meramente conjeturales (En similar sentido, CSJN MOÑO AZUL SA. SENT. DEL 15 4 93, CN CONT. ADM.FED. SAFRA C.I.F. c/ A.N.A. Sent. del 7.5.96, entre otros). Tales exigencias no se encuentran cumplidas en la presentación en cuestión.

En reiteradas ocasiones el más Alto Tribunal de la Nación señaló que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico" (CSJN Fallos 288: 325; 290:83; 294: 383; 312: 1437 y 1681; "Rallin Hugo Félix y otros" Sent. del 7 5 91; "IACHEMET, María c/Armada Argentina" Sent. del 29 4 93; "Conti Juan c/Ford Motor Arg. S.A." Sent. del 29 3 88; entre otros ).

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al recurrente, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt). ( CSJN T. 315 , P. 1620 )

En consecuencia, se tomara en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. 'c;/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018 )

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en \$ 7000 siete mil pesos y los de la demandada en\$ 10.000, diez mil pesos Conf. ley 21.839 mod. y cc.). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “sent. Del 16.06.93, Fallos 316,1533).

Por lo señalado, propicio: Desestimar el beneficio de litigar sin gastos. Habilitar la instancia. Rechazar el recurso impetrado con costas Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en \$ 7000 siete mil pesos y los de la demandada en \$ 10.000 diez mil pesos. Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder. Liquidar por Secretaría la tasa judicial e intimar al actor a su cancelación en el término de ley.

### **LOS DOCTORES WALTER F. CARNOTA Y NORA CARMEN DORADO DIJERON**

Adherimos al voto del Dr. Fantini Abarenque

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: Desestimar el beneficio de litigar sin gastos. Habilitar la instancia. Rechazar el recurso impetrado con costas. Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en \$ 7000 siete mil pesos y los de la demandada en \$ 10.000 diez mil pesos. Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder. Liquidar por Secretaría la tasa judicial e intimar al actor a su cancelación en el término de ley.

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara  
Subrogante)

JUAN A.FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

ANTE MÍ:  
AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

